



La salida de Ortega: el único escenario posible



Foto: Carlos Herrera

A inicios del 2018, en el boletín *Perspectivas* afirmamos que éste sería un año decisivo para el régimen Ortega. En efecto, la insurrección cívica que inició en abril, ya lleva dos meses de movilización y resistencia en todo el país, llevando al régimen a una fase terminal donde el único camino posible es la salida de la camarilla Ortega-Murillo del poder y el restablecimiento de la democracia.

Resistencia cívica imparable

La movilización y la protesta social no ha cesado desde que comenzó a inicios de abril, por el contrario, se ha extendido a todos los territorios del país y ha sumado prácticamente a todos los sectores sociales en rechazo al régimen Ortega por la sostenida y brutal represión en contra la población desarmada. Durante estos dos meses, la resistencia y firmeza de la población demandando justicia, seguridad y democracia se han mantenido, convirtiéndose en los pilares fundamentales para la articulación de las acciones sociales.

Desde los primeros llamados de acción hasta la fecha, se ha ido conformando un movimiento social que no pierde su característica de ser autoconvocado, pero ya da muestras de estructuras organizativas de carácter flexible, con una dirección más clara y mejores niveles de coordinación. Las expresiones del movimiento son múltiples, está conformado por numerosos grupos que tienen sus propias formas de organización, liderazgos, comunicación y acción social; pero la columna vertebral está conformada por un nuevo y todavía incipiente movimiento estudiantil, el movimiento campesino, principalmen-

te agrupado alrededor del movimiento anticanal; el movimiento de mujeres y un movimiento ciudadano más de carácter urbano.

El repertorio de las acciones sociales es amplio, diverso y muy creativo. Entre las más visibles están: la ocupación de los recintos universitarios por parte del movimiento estudiantil, los tranques en las principales carreteras del país realizados por el movimiento campesino y las marchas o movilizaciones en las ciudades, realizadas por el movimiento ciudadano más urbano. Las acciones de movilización han tenido momentos pico y de descenso, pero en general, es un movimiento en ascenso y en perspectiva, tiende a fortalecerse más que a debilitarse. Desde el inicio hasta hoy, se ha caracterizado por la firmeza de sus demandas, el civismo de las acciones, la diversidad de los actores participantes y la complementariedad de las acciones.

Gobierno debilitado al máximo

La resistencia cívica que ha sostenido el movimiento ha colocado al gobierno en una posición de debilidad desde el inicio, pues no era como muchos pensaban, un gobierno fuerte y consolidado. En la medida que el movimiento social se ha ido consolidando y ha mantenido su nivel de acción social, el gobierno se debilitado aún más hasta el punto de encontrarse prácticamente en bancarota política. Ortega prácticamente no cuenta con todos puntos de apoyo y la razón principal de su extrema debilidad es la pérdida de legitimidad y credibilidad por el uso indiscriminado de la represión como método para contener la protesta.

El hilo rojo de su estrategia para contener al movimiento social ha sido la represión, pero



Foto: Carlos Herrera

ha tenido que variar los métodos represivos que han resultado inútiles frente a la firmeza y decisión ciudadana de cambio. Durante la primera semana de protestas la policía y los grupos parapoliciales fueron los responsables de reprimir indiscriminadamente a la población pensando que eso iba a contenerla, eso incluyó asesinatos, golpizas, detenciones y amenazas. La brutalidad de la represión durante los primeros cuatro días de protestas dio como resultado más de 76 personas asesinadas, un centenar de heridos y casi doscientos detenidos de manera arbitraria. Las acciones organizadas por el gobierno y sus grupos parapoliciales incluyeron saqueos en tiendas e incendios; luego replegó a las fuerzas policiales y más tarde, cuando no logró detener las multitudinarias marchas en las principales ciudades del país, utilizó de nuevo a la policía y los grupos parapoliciales para reprimir manifestantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita al país entre el 17 y 21 de mayo para observar la situación del país y recibir denuncias. En esos días, visitó cuatro ciudades del país y recogió más de 1,700 denuncias de violaciones. Su informe de preliminar de observación confirmó que se habían producido graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua, principalmente cometidas por la policía y las fuerzas parapoliciales; que los asesinatos presentaban un patrón pues los disparos eran letales, se había negado asistencia médica a las víctimas en los hospitales públicos y no se había cumplido con los procedimientos de rigor relacionados con la realización de autopsias, la determinación de las causas de muerte en el caso de los asesinatos y que en muchos casos se había obligado a los familiares de las víctimas a firmar documentos desistiendo de denunciar los hechos. La CIDH hizo 15 reco-

mendaciones para ser implementadas a lo inmediato por el gobierno.

La estrategia de represión varió hacia nuevas formas de terror y el incremento de la violencia contra la población. Esas nuevas formas incluyen ataques nocturnos realizados por grupos de personas vestidas de civil que disparan indiscriminadamente armas de fuego desde vehículos, el secuestro y ejecución sumaria de jóvenes; además, se mantienen los ataques policiales, saqueos e incendios a comercios. El 30 de mayo, fecha en que se celebra el día de las madres en Nicaragua, se realizó una multitudinaria marcha en homenaje a las madres de los jóvenes asesinados en abril y mayo, la cual fue atacada por fuerzas policiales y parapoliciales que dispararon sobre la multitud y asesinaron a varias personas. Ataques similares se realizaron en otras ciudades con un alto saldo de personas asesinadas y heridas de gravedad. En ciudades como Masaya, León, Matagalpa y numerosos barrios de Managua, la población ha organizado comités de autodefensa frente a estos ataques. Al final del mes, la cantidad de asesinatos ya sobrepasaba el centenar, los heridos son más de 500, el número de detenidos también se ha elevado y hay varios jóvenes desaparecidos.

El ejército, la institución que desde la transición de los 90 ha sido vista como un actor clave que puede inclinar el fiel de la balanza en situaciones de crisis política, se ha mantenido al margen, negando públicamente en varias ocasiones su involucramiento en las acciones de represión. Esto representa un revés para el gobierno que esperaba contar con su apoyo como recurso de poder para aplastar las protestas. Es claro que el Ejército le ha negado su respaldo a Ortega.

Las fuerzas de apoyo del gobierno se han reducido básicamente a: a) la policía y los grupos



Foto: Carlos Herrera

parapoliciales, los cuales también se han venido desgastando por la dinámica e intensidad de las protestas; b) un disminuido sector público que cada vez se resiste más a asistir a las actividades del gobierno y mostrarle su respaldo; c) un pequeño grupo de sindicatos oficialistas; y d) algunos sectores sociales minoritarios como iglesias evangélicas y el círculo de colaboradores más cercanos al régimen. Del otro lado, el movimiento social se ha fortalecido con la construcción de consensos importantes entre sectores clave como los estudiantes, el sector privado, el sector campesino, la sociedad civil y la misma iglesia católica.

El impase del diálogo

El diálogo nacional inició el 16 de mayo y la primera sesión fue histórica, pues los jóvenes estudiantes se atrevieron a desafiar públicamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo, obligándolos a escuchar lo que nunca habían querido: les reclamaron a viva voz por los jóvenes asesinados, pidieron justicia y democracia. Esa interpelación marcó la pauta del diálogo de allí en adelante y le dio energía a la protesta social en la calle. La segunda y tercera sesiones fueron duras y complejas, aunque se logró llegar a acuerdos. En la segunda sesión se acordó una “tregua” de 48 horas en la que el gobierno se comprometía a detener todas las acciones de represión de parte de la policía y de las fuerzas parapoliciales. La tregua no fue respetada por el gobierno, quien en menos de 24 horas ya había realizado un ataque a uno de los recintos universitarios ocupados por los estudiantes.

En la tercera sesión se acordó asumir las 15 recomendaciones realizadas por la CIDH en su informe preliminar de observación para su implementación a la brevedad posible.

La cuarta sesión, que estaba dedicada a los temas de la democratización no prosperó. El gobierno se enfrascó en una discusión que tenía como propósito conseguir un acuerdo para que se levantaran los tranques que el movimiento campesino ha instalado en las principales carreteras del país. Al final del día, la conferencia episcopal decidió suspender la sesión y conformar una comisión ejecutiva de 3 representantes del gobierno y 3 de la sociedad nicaragüense para establecer una agenda de consenso. La comisión se reunió días después y logró fijar una agenda que incluía la discusión de la democratización del país; sin embargo, la represión desatada y elevada a mayores niveles de violencia por parte del gobierno, obligó a la Conferencia Episcopal a suspender el diálogo hasta tanto no se aseguraran condiciones para ello. El diálogo se encuentra en un impase y de momento no hay visos de que reinicie.

Sobre él hay al menos tres visiones distintas: la visión del gobierno que lo ve siempre como un mecanismo para ganar tiempo mientras ejecuta sus acciones de represión; la visión de quienes piensan que es vía más pacífica y democrática para la grave crisis política del país; y la tercera visión es la de quienes consideran que es un ejercicio inútil y no tiene sentido en tanto el gobierno no tiene verdadera voluntad política para resolver la crisis política en el país. Más allá de esas visiones, lo cierto es que el diálogo es un recurso más de acción para el movimiento social. Los representan-

tes de la sociedad nicaragüense han logrado construir consensos importantes entre ellos y contribuye a fortalecer el carácter cívico y pacífico de la protesta.

La CIDH, la OEA y la comunidad internacional

Como ya se mencionó antes, entre el 17 y 21 de mayo, una misión de la CIDH encabezada por la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, el Secretario General, Paulo Abrao, y otros relatores especiales, visitaron el país para observar la situación de los derechos humanos a partir del 18 de abril. Se encontraron con una situación más grave de lo que habían imaginado. Miles de personas se acercaron a ellos en Managua, Masaya, León y Matagalpa para denunciar la violación de sus derechos humanos por parte del gobierno. El informe preliminar de esa visita concluye que entre el 18 de abril y el 17 de mayo, ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, que tuvieron como consecuencia 76 asesinatos, 868 heridos y 438 detenidos. Estas violaciones incluyeron: censura, agresiones y ataques a la prensa; ataques a parroquias; uso desproporcionado y letal de la fuerza policial; desconfianza en las instituciones de administración de justicia; falta de documento y observación de los procedimientos requeridos para los dictámenes forenses de asesinados y heridos; amenazas, intimidaciones y ataques a defensores/as de derechos humanos; y negación o negligencia en la atención médica a las víctimas de la represión. La CIDH realizó 15 recomendaciones para ser implementadas por el gobierno como principal responsable de la represión y sus consecuencias.

El 30 de mayo el gobierno en conjunto con la CIDH y la Secretaría General de la OEA, firmó un acuerdo para establecer un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvará y apoyará las investigaciones sobre los hechos ocurridos desde el 18 de abril con autonomía e independencia. El Grupo estará integrado por 4 personas y un equipo técnico, y su mandato se extenderá por un período de 6 meses. Ese mismo día, horas después de firmado el acuerdo, el gobierno Ortega masacró una multitudinaria marcha realizada en Managua, el día de las madres, en homenaje a las madres de los jóvenes asesinados en los últimos dos meses.

En el marco del Diálogo y previo a la 48 Asamblea General de la OEA a realizarse en los primeros días de junio, el Secretario General de ese organismo, Luis Almagro ha insistido reiteradamente en proponer se mantenga un proceso de negociación cerrado entre el gobierno y una misión de esa organización sobre reformas elec-

torales necesarias para sanear el sistema electoral del país. Diversos actores nacionales han rechazado esa propuesta porque consideran que oxigena al gobierno Ortega, haría a un lado el Diálogo nacional y establecería una ruta política que no necesariamente respondería a las demandas de la mayoría de población relacionadas con la seguridad, la justicia y la democracia. Los posicionamientos personales del señor Almagro han generado mucha desconfianza y malestar entre la sociedad nicaragüense, quien pide mayoritariamente a la OEA que no contribuya a sostener un gobierno dictatorial.

Otros actores internacionales como el Parlamento Europeo y gobiernos de numerosos países, incluido Estados Unidos, han expresado su preocupación y rechazo a la brutal represión del gobierno contra la población nicaragüense, y han hecho llamados para encontrar una salida pacífica y democrática a través del Diálogo.

La salida del poder como único escenario posible

Con una correlación de fuerzas evidentemente desfavorable, la única salida posible para Daniel Ortega es dejar el gobierno. Sus bases de apoyo se encuentran reducidas a las fuerzas policiales y parapoliciales, y la estrategia de represión abierta no ha logrado contener, y mucho menos eliminar, la insurrección cívica ciudadana que más bien se ha extendido y crecido en todo el país.

En esa perspectiva, el mecanismo del Diálogo debería ser la mejor opción para Ortega, pues le permitiría una salida menos traumática para él y su familia, así como para el país; sin embargo, se ha empeñado en aferrarse al poder. El impase en el que se encuentra el Diálogo se debe precisamente a su empeñamiento. Existen varias rutas posibles en el marco sin romper el orden constitucional del país. Los representantes del movimiento ciudadano, incluido el sector privado, están trabajando en las posibles rutas, así como la Conferencia Episcopal. El gobierno mientras tanto, ha pretendido deslegitimar ese espacio y en una oscura negociación con la Secretaría General de la OEA, insiste en establecer un diálogo paralelo o sustituto con la intermediación de esta instancia. Intento que ha fracasado hasta ahora.

Mientras tanto, el movimiento ciudadano mantiene las acciones sociales en todo el país y sigue dando muestras de fortaleza. Las distintas acciones que ha venido realizando a lo largo de dos meses no han cesado y la firmeza de la gente se mantiene. Más bien, se ha reforzado la demanda generalizada expresada en una corta frase: ¡De que se van, se van! Un augurio que resume el único escenario posible para Nicaragua en el corto plazo.